

¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad?

BIBLIOTECA BERNARDO KLIKSBERG

XXV Claves para la acción



La Biblioteca Bernardo Kliksberg tiene el auspicio especial de la



Suplemento especial de **Página12**

Colección declarada por unanimidad de "Interés económico y cultural de la ciudad" por el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.

El autor ha hecho un recorrido sobre 23 temas clave de nuestro tiempo, fundamentales para entender, analizar y actuar sobre los dos grandes desafíos, ya no más postergables, de nuestro tiempo: las condiciones de pobreza que agobian a buena parte del género humano y las agudas desigualdades que son una causa central de ellas.

Los temas sucesivamente analizados fueron: **I** Los escándalos éticos de nuestro tiempo, **II** ¿Por qué la actual crisis económica mundial?, **III** ¿Qué está pasando con los jóvenes?, **IV** Inseguridad ciudadana. Hora de mejorar la calidad del debate, **V** Mitos, falacias y racionalizaciones sobre la pobreza y la desigualdad, **VI** Salud pública, el tema postergado, **VII** Economistas ortodoxos en aprietos. El capital social se puso en marcha, **VIII** ¿Quién le teme a la participación?, **IX** Mujeres, el mayor grupo discriminado de todo el planeta, **X** ¿Qué está pasando con la educación? Una cuestión clave, **XI** El apartheid climático, **XII** La pelea por las percepciones y los valores, **XIII** El voluntariado. Ciento cuarenta millones ayudando a los demás, **XIV** Niños, el discurso y la realidad, **XV** Desigualdades indignantes, **XVI** El Estado en tiempos de crisis, **XVII** ¿Es posible erradicar la corrupción?, **XVIII** Mejorando el mundo. Los emprendedores sociales, **XIX** Por más ética empresarial, **XX** La familia en época de crisis económica, **XXI** La hora de la economía social, **XXII** ¿Qué piensan los latinoamericanos sobre la democracia?, y **XXIII** Caras ocultas de discriminación y pobreza.

En estos dos números finales de la Biblioteca se incluyen extractos seleccionados que dan cuenta de algunos de los hitos principales del trayecto realizado y llaman en sí mismos al cambio. Constituyen claves para la acción.

I Si todo anda bien, por qué las cosas están tan mal

Chile es el número uno de América latina en la prueba de Pisa, que mide el rendimiento educativo de los niños de 13 años, en matemáticas, comprensión, lectura y ciencias.

¿Alcanza la prueba de Pisa para saber cómo los países andan en educación, el gran tema del siglo XXI?

Si es por el caso de Chile, claramente no. Los estudiantes chilenos están llevando adelante la mayor protesta que se haya dado en relación con el sistema educativo de la región en décadas.

Con precedentes en la rebelión de los pingüinos, los estudiantes de secundaria en el 2006, la actual protesta masiva fue mucho más lejos.

Iniciada en mayo de 2011, nucleó a todas las organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias y a los docentes y lleva siete meses enfrentando en las calles a la represión y en los medios a las descalificaciones de las élites de poder.

Según las encuestas, más del 80 por ciento de la población se ha identificado con sus reclamos y en algunas de sus marchas participaron casi un millón de personas.

¿Qué les pasa a los estudiantes chilenos? ¿Qué reclaman?

Nada menos que contra la inequidad en educación. Un problema de orden mayor, que afecta a la gran mayoría de los países en América Latina, y que está en el núcleo duro de las causas por las que la región es la más desigual de todo el orbe.

El dictador tenía las cosas claras. Un día antes de

dejar el Gobierno, Pinochet dictó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

La Ley propulsó la privatización. Entregó al mercado buena parte del sistema educativo. Sentó las bases para la entrega a la educación privada de fondos cuantiosos del Estado, sin fiscalización mayor. Municipalizó, dejando los niveles de calidad librados a la mayor capacidad económica de cada municipio. Aranceló la educación universitaria, con costos que significaban que un estudiante debía endeudarse por veinte años para pagar una carrera.

Segmentó socialmente, creando diversos circuitos de educación, y reforzando así todas las otras desigualdades.

La BBC describe las protestas diciendo que la "ira estudiantil" se debe a "la percepción de que el sistema educativo de Chile es groseramente inequitativo. Les da a los estudiantes ricos acceso a algunas de las mejores educaciones posibles en América latina, mientras que arroja a los estudiantes pobres a degradadas y subfinanciadas escuelas públicas".

La situación creada llevó a las clases medias a escaparse de las escuelas públicas. La matrícula de la escuela pública secundaria bajó de 63 por ciento de la población escolar en 1986 a 43 por ciento en 2008.

La mayoría de las universidades son hoy privadas. No se han construido nuevas universidades públicas desde el final de la dictadura.

Los que llegan a graduarse en secundarios pobres compiten en desventaja en las pruebas de selección en las universidades, pero además, como son aranceadas, no pueden financiarse.

Como señala Trucco (Cepal 2011): "En vez de que la oferta educativa cumpla la promesa y la expectativa de revertir las desigualdades sociales de origen, lo que está haciendo es reproducirlas".

II ¿No saben lo que quieren?

¿Cómo enfrentar los argumentos de los indignados españoles, o los ocupa Wall Street? ¿Cómo contestar al lema de "somos el 99 por ciento y hay un 1 por ciento que concentra la mayor parte del patrimonio mundial", respaldado por las cifras, y que ha tenido tanta resonancia?

A falta de respuestas, los sectores que no desean cambio alguno en el statu quo han apelado a la descalificación.

Puede ir desde "son confusos", "quieren muchas cosas diferentes", "en definitiva no saben lo que quieren", hasta que "tienen el pelo largo", "no se bañan", "hacen ruido" y similares.

La cuestión es desplazar la agenda principal de discusión por otra secundaria, que la tape y relegue.

Muy difícil de hacerlo en el caso de las protestas estudiantiles chilenas. Además de que apelaron a innovaciones muy creativas, que concitaron amplia simpatía en la sociedad, sus demandas son muy específicas y concretas. Si se aceptaran, claramente la inequidad en la educación que denuncian mejoraría drásticamente.

Entre ellas:

● Aumento del presupuesto para educación, que es actualmente sólo del 4,4 por ciento del Producto

Bruto Interno, el 60 por ciento del 7 por ciento que recomienda la ONU.

● Educación pública gratuita en todos los niveles.
● Reemplazo del sistema actual de educación primaria y secundaria a cargo de los municipios, que genera desigualdades, por un sistema gubernamental central.

● Subsidiar solo la educación sin fines de lucro, no como actualmente, a las escuelas que son empresas privadas.

● Mayor apoyo presupuestario para las universidades públicas, que en la actualidad financian sus actividades principalmente a través de las matrículas pagas.

● Creación de una "universidad intercultural" que permita corresponder a las demandas de los estudiantes mapuches.

● Supresión de las leyes que prohíben la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades.

● Mejores remuneraciones para los maestros y plan nacional para atraer a los mejores talentos a la profesión y subir su status social.

Las luchas de los estudiantes chilenos están señalando un problema que es un pilar de las grandes desigualdades que presenta toda América latina.

Ha habido avances muy valiosos en matriculación en primaria y alfabetización, Pero hay agudas inequidades, que se reflejan nítidamente en los datos de deserción, los años de escolaridad y la calidad diferente de educación que reciben los diversos estratos sociales.

III La desigualdad crece

El Instituto del Crédit Suisse, uno de los bancos líderes en asesoría a las grandes fortunas, estima que el 0,5 por ciento de la población adulta del planeta tiene nada menos que el 35,6 por ciento de la riqueza del mundo. El 7,5 por ciento siguiente en riqueza es dueño del 43,7 por ciento.

Forbes, que hace la lista anual de los 1200 millonarios más ricos del mundo, dice (marzo de 2011) que en conjunto tienen 4,5 trillones de dólares. Del otro lado, los 3000 millones de personas que tienen menos de 10.000 dólares suman 8,2 trillones.

Esto implica que 1200 personas tienen más que 1650 millones. Qué diría Platón, que abogaba por que se hiciera todo lo posible porque hubiera un equilibrio en la distribución de la riqueza.

Un reciente informe (diciembre de 2011) de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación (OECD), que agrupa a los cincuenta países más ricos, denuncia que la desigualdad en esos países es la mayor en los últimos treinta años.

El ingreso del 10 por ciento más rico es 9 veces el del 10 por ciento más pobre. La relación varía mucho según los países. Va de 5 a 6 veces en los nórdicos, hasta 10 a 1 en Italia, Japón, Corea y Gran Bretaña; 14 a 1 en Turquía y Estados Unidos, y llega a su máximo nivel, 27 a 1, en México y Chile.

Dentro del 10 por ciento más rico, el 1 por ciento tiene cada vez más y a su vez, dentro de él, el 0,1 por ciento es el que tuvo más ganancias.

En la principal potencia económica mundial, EE.UU., el 0,1 por ciento cuadruplicó su participación en los ingresos preimpuestos, entre 1978 y 2008.

Las tendencias al empeoramiento de la desigualdad tienen expresión mundial, con claras excepciones, como las de los países nórdicos y América del Sur.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del PNUD se constata entre otros aspectos que el coeficiente Gini, que mide el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos, se ha elevado. Ahora hay más países con un coeficiente Gini alto que en la década de 1980. Por cada país donde la desigualdad disminuyó en los últimos veinte o treinta años o aumentó en más de dos dígitos, la participación del trabajo en los ingresos cayó en 65 de 110 países en las últimas dos décadas.

En Rusia, Estados Unidos y la India, la caída fue de nada menos que 5 por ciento entre 1990 y 2008.

IV Costos humanos de las desigualdades

Una oleada de investigaciones de los últimos años ha demostrado que las altas desigualdades son nefastas para la economía y la sociedad. Entre otras comprobaciones, han encontrado que generan "trampas de pobreza", reducen los mercados internos, bajan la capacidad de ahorro nacional, llevan a muchos alumnos a desertar de la escuela y a que reciban educación de poca calidad, crean inequidades múltiples en salud, degradan la cohesión social, provocan fuertes grados de conflictividad, promueven la criminalidad y estimulan y facilitan la corrupción.

El director de la OCDE, Angel Gurría, resaltó al presentar el estudio sobre el crecimiento de la desigualdad: "El contrato social está empezando a desmoronarse en muchos países. Este estudio echa por tierra la hipótesis de que los beneficios del crecimiento económico automáticamente repercuten sobre los más desfavorecidos".

En los países más ricos, las desigualdades tienen serios impactos en las condiciones de vida más básicas de vastos sectores. Lo mismo sucede en modo amplificado en los países en desarrollo, donde los sistemas de protección social han sido normalmente más débiles que en los ricos.

Las desigualdades impactan regresivamente en dos de las bases estratégicas para que las personas comunes puedan acceder a oportunidades y progresar: la salud y la educación.

En salud, actúan tanto sobre aquellos determinantes sociales que inciden en la producción de salud o enfermedad, cuanto en el acceso a coberturas de salud. Un reciente estudio sobre treinta países industrializados refleja cómo las desigualdades en determinantes sociales de la salud impactan sobre ella.

Bradley y Taylor (diciembre de 2011) dicen que normalmente se pregunta por qué Estados Unidos, que gasta en salud más que muchos otros países desarrollados, tiene tan bajos índices en términos de esperanza de vida y mortalidad infantil comparadas con ellos.

Está por debajo de la mitad de la tabla en logros.

En tanto que la esperanza de vida norteamericana está estacionada en 78 años, en muchos países europeos superó los 80 años. Asimismo, sus tasas de mortali-

dad infantil son la mitad de las de EE.UU.

Consideran que se debería tomar, junto al gasto directo en salud, el gasto en servicios sociales, como los subsidios de alquiler, los programas de capacitación laboral, los seguros de desempleo, el valor de las jubilaciones, las ayudas a las familias y otros servicios que pueden extender y prolongar la vida.

Cuando eso se toma en cuenta, se ve que en 2005 EE.UU. dedicaba sólo el 29 por ciento de su producto bruto a salud y servicios sociales combinados. Esa cifra era del 33 al 38 por ciento en Suecia, Francia, Holanda, Bélgica y Dinamarca.

Gastaba menos que los otros en estos productos de salud, pero además las proporciones eran peores. Por cada dólar que gastaba en el sistema de salud, EE.UU. asignaba 90 centavos a servicios sociales. En los otros países, por cada dólar en salud se adicionaban dos dólares en servicios sociales.

Los gastos en servicios sociales actúan como políticas igualadoras en relación con la salud. Cuanto más débiles esas políticas, peores serán los niveles de salud.

En los países de Europa donde se están recortando estos programas, son ya visibles los resultados regresivos.

En el mundo en desarrollo, a los déficit de políticas públicas de servicios sociales se suman las pronunciadas disparidades en acceso a cobertura de salud. Un estudio en 55 países (PNUD 2010) muestra que en los hogares pobres sólo el 40 por ciento de los chicos recibieron todas las vacunas, comparado con el 66 por ciento en los de mejores recursos.

En Perú, el 20 por ciento más rico tiene acceso universal a personal entrenado en el parto, mientras que en el 20 por ciento más pobre sólo lo tiene entre el 10 y el 15 por ciento de las madres.

Las desigualdades en servicios sociales, cobertura médica y otros aspectos traen graves brechas en salud, que después se van a expresar en posibilidades muy diferentes de alcanzar resultados educativos y conseguir trabajo.

La incidencia de las desigualdades generales en educación es dramática. La escuela recibe a los niños con diversos bagajes de condiciones que van a repercutir fuertemente sobre su rendimiento. Nuevamente hay determinantes sociales además de lo que la escuela pueda hacer.

Así, los niños de los países en desarrollo aprenden en los mismos años menos que los de los países desarrollados. En pruebas estandarizadas, sus puntajes son inferiores en un veinte por ciento a los de los países industrializados. Eso equivale a tres grados.

Pero en el interior de los países ricos sucede lo mismo. En una observación mucho más aguda que la de algunos analistas argentinos cuando sacan conclusiones apresuradas sobre la prueba de Pisa, dos expertos norteamericanos, Ladd y Fiske, se preguntan (*The New York Times*, 12/12/11): "Los resultados de las pruebas de lectura 2009 del PISA muestran que en EE.UU., al igual que en los trece países en que los estudiantes de 15 años superan a los norteamericanos, los alumnos con status económico y social más bajo tienen menores resultados que los de mejor status en cada país. ¿Puede alguien creer que la mediocre performance de los estudiantes norteamericanos

en los tests internacionales no está vinculada con el hecho de que el 20 por ciento de los niños viven en la pobreza?".

Las cifras son categóricas. El 40 por ciento de la variación en desempeño en lectura y el 46 por ciento de la variación en conocimiento de matemáticas entre estados en EE.UU. está asociado con la variación en las tasas de pobreza infantil.

Más desigualdad y pasividad o inacción en políticas públicas a favor de los desfavorecidos generan variaciones sustanciales en salud y educación y en otros terrenos que van a alimentar la reproducción y ampliación de las desigualdades.

La desigualdad es un generador neto de pobreza, como se constató con tanta fuerza en América latina en los '80 y '90.

V ¿Por qué avanza la idea de RSE?

Hay importantes fuerzas históricas que reclaman un cambio profundo en la concepción de la empresa privada y de su rol. Entre ellas se destacan:

● Una sociedad civil movilizada

En la lucha por democracias reales, los ciudadanos exigen ética a los políticos, pero también cada vez más a los empresarios.

Las ONG y la opinión pública han librado en los países desarrollados extensas luchas, como la que llevaron adelante en defensa de la salud pública contra una de las concentraciones empresariales más poderosas, la de la industria del tabaco. Sin esas luchas, los millones de muertes anuales que produce el cigarrillo serían aún muchas más. Han sido fundamentales en derrotar la tesis propiciada por empresas contaminantes de que no hay un peligro medio ambiental real.

● Los pequeños accionistas defraudados

Los pequeños accionistas están en total ebullición frente a la caída de las grandes instituciones financieras de Wall Street y de otros países desarrollados, con grandes pérdidas para ellos. Exigen, a través de los fondos de pensiones y otras organizaciones en que han invertido, un cambio sustancial en las reglas de juego, en el que el buen gobierno corporativo controlado es una reivindicación central. Entre sus protestas están ahora las enormes retribuciones de los altos ejecutivos, muchas veces autofijadas, porque cooptan a los consejos directivos, en cuyo nombramiento influyen, y la mencionada disociación entre su rendimiento y lo que cobran. Así, dicen los directores de dos grandes organizaciones que trabajan con pequeños inversores, Fidelity World Wide Investment y la Asociación de Aseguradores de Gran Bretaña: (*The New York Times*, 23/1/12): "Los niveles inapropiados de remuneración de los ejecutivos han destruido la confianza pública y llevado a una situación donde se percibe que todos los directores están sobrepagados". Los ánimos de los pequeños inversionistas y de la sociedad se caldearon en Inglaterra en estos días, cuando se supo de los planes para pagarles

millones a los altos ejecutivos del Banco Barclay, aunque el precio de las acciones del banco haya caído en un 30 por ciento el año pasado. El Royal Bank of Scotland anunció que pagaría a su jefe de inversiones una gran suma, aunque el banco declaró que iba a despedir a miles de empleados. Los pagos a los ejecutivos de las cien empresas mayores en Gran Bretaña crecieron en promedio 49 por ciento en 2010, cuando las remuneraciones de los empleados lo hicieron solo un 2,7 por ciento.

● *Consumidores responsables*

En tercer término se halla el avance del consumo responsable. En los Estados Unidos, como en otras economías desarrolladas, crece el “consumidor verde o ético”. Se estima en no menos de 110.000 millones de dólares en EE.UU. el mercado de consumidores que cuando compran tienen en cuenta si la empresa es saludable, amigable con el medio ambiente y sus niveles de RSE.

Ciudadanos activos, accionistas indignados y consumidores responsables están empujando el cambio de paradigma en RSE. Son fuerzas que han llegado para quedarse. Cuanto más progresa el irreversible proceso de democratización que viven amplias áreas del planeta, mayor será su incidencia y presión. Están movilizadas por la profunda decepción que ha dejado el comportamiento ético personal y empresarial de amplios sectores de las elites empresariales. Plantean que algo muy importante debe cambiar.

La Encuesta Edelman entrevistó a fines de 2011 a una muestra de 5075 personas del 25 por ciento más rico de la población de 23 países, de cinco continentes. Encontró una fuerte caída de la confianza en las empresas en el último año. Bajó en EE.UU. del 54 al 46 por ciento, en Francia del 48 al 36, en Gran Bretaña del 49 al 44 por ciento.

Se hizo a este 25 por ciento más rico una pregunta muy concreta: “¿Las corporaciones deben crear valor accionario que se alinee con los intereses de la sociedad, aun cuando ello signifique sacrificar ese valor?”. La gran mayoría contestó que sí: Alemania 91 por ciento, Gran Bretaña 89, China 89, EE.UU., 85, México 85, Canadá 82, Suecia 81, Argentina 78, India 74 por ciento.

La encuesta concluye: “Las empresas deben alinear los objetivos de ganancias y metas sociales”.

En el campo de las ideas, la RSE ha ganado. Es nadar contra la corriente hoy oponerse a ella. La doctrina Friedman fue derrotada. Pero esto no sucede así necesariamente en el campo de los hechos.

VI La gran mentira

Según repiten con frecuencia los economistas ortodoxos en el mundo desarrollado, y en el país, la culpa de la crisis está en el Estado de Bienestar. Desarmándolo se desactivaría su causa central.

Los datos indican lo contrario. En los países con Estado de Bienestar más desarrollado –como Noruega y Suecia– la crisis no se produjo. Su presencia hace que la población sea protegida y ello la empodera productiva y económicamente, asegurando las bases de crecimiento de la economía.

Incluso el país menos afectado por la crisis europea, Alemania, es el que tiene mayor Estado de Bienestar de acuerdo con su gasto en servicios sociales.

Ello puede verse asimismo en los ejemplos de Canadá y EE.UU. Canadá, que tiene servicios sociales mucho más amplios que los de EE.UU., con un sistema de salud pública universal y una gran red de protección social, ha enfrentado mucho mejor la crisis que EE.UU.

La gran mentira no coincide con la realidad, pero es muy funcional, permite dar un aura de legitimidad a cortes que son éticamente inadmisibles y que violan los derechos sociales más básicos.

Están produciendo un círculo perverso en todos

los países en que se están aplicando: reducción del Estado, achicamiento de las políticas públicas cuando más necesarias son, descenso del consumo, baja de la recaudación fiscal, aumento de los impuestos y los cortes para compensarla y más recesión.

Ya Keynes había explicado en 1937 que “La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”, advirtiéndole a Roosevelt que no se apurara y no ahogara la recuperación en desarrollo.

VII El Estado necesario

Hay una gran demanda social en la región por “más Estado”, pero de una mejor calidad.

No se aspira a un retorno al Estado de los ‘60, sino a construir un Estado eficiente, participativo, y equitativo. El autor lo ha llamado en algunas de sus obras “un Estado inteligente”.

Frente al argumento de que hay que tener “cuidado” con el crecimiento del Estado en la región, vale la pena ver las estadísticas actuales. Según un informe reciente de Cepal y OCDE sobre el Estado (diciembre 2011), “el gasto público como porcentaje del Producto Bruto Interno muestra un rezago de la región con respecto a los países de la OCDE. A pesar de que el gasto público ha aumentado, aún las diferencias son sustanciales, e incluso se han ampliado en los últimos años”. El empleo público representa la mitad del tamaño que tiene en los países de la OCDE.

La región está también muy atrás en el proceso de descentralización. Ha habido avances importantes en transferir poderes y competencias a las regiones y municipios, pero el gasto municipal es sólo el 9,5 por ciento del Producto Bruto. En la OCDE es el 20,6 por ciento.

Entre las reformas pendientes se halla la necesidad de un nuevo pacto fiscal, a favor del desarrollo y la gente.

Cuando el 1 por ciento más rico de América latina y muchas voces sin información de los estratos medios se quejan de la presión fiscal en la región, deberían ver las cifras comparativas. En los países de la OCDE la carga tributaria se estima en el 34,8 por ciento del Producto Bruto (2008), en América latina en un promedio del 20,6 por ciento, un 40 por ciento menor. Por otra parte, mientras que en los primeros las principales fuentes fiscales son los impuestos directos al patrimonio y los ingresos, los que más afectan a los que tienen más, en América latina son los indirectos, que impactan en toda la población. El sistema es marcadamente más regresivo.

No es América latina la que tiene hoy que mirar a una Europa y a los sectores en EE.UU. que dicen haber descubierto que hay que recortar drásticamente el Estado, inventando pretextos para hacerlo. Es al revés. Ya se hizo en América latina. “Memento lo hizo”, así como previamente la dictadura militar genocida, y al mismo tiempo Salinas en México y otros, y los resultados están a la vista.

El Estado es, en una democracia, la acción colectiva potenciada. Tiene funciones irremplazables como, entre otras, la mejora de la equidad, el desarrollo de las energías productivas de la población, la potenciación de la inclusión, dar acceso a todos a salud y educación, proveer los motores del empoderamiento productivo laboral y ciudadano, el apoyo a la investigación científica y tecnológica, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la cultura, el rescate de la memoria, la protección irrestricta de los derechos humanos y de la democracia misma.

Prescindir de él es renunciar a la acción colectiva. Es casi suicida hacerlo en el mundo actual, pero favorece los intereses de aquellos a los que no les conviene que la sociedad se organice para regular, combatir las desigualdades y dar voz y poder real a las grandes mayorías.

Prescindir de él es renunciar a la acción colectiva. Es casi suicida hacerlo en el mundo actual, pero favorece los intereses de aquellos a los que no les conviene que la sociedad se organice para regular, combatir las desigualdades y dar voz y poder real a las grandes mayorías.

Prescindir de él es renunciar a la acción colectiva. Es casi suicida hacerlo en el mundo actual, pero favorece los intereses de aquellos a los que no les conviene que la sociedad se organice para regular, combatir las desigualdades y dar voz y poder real a las grandes mayorías.

Construir el Estado necesario en Argentina y América latina es uno de los mayores desafíos históricos que enfrentan el país y la región e incidirá decisivamente en su futuro.

VIII Perspectivas

La crisis económica mundial ha arrojado a la desesperanza a importantes sectores del mundo desarrollado, particularmente a los jóvenes.

Encontrar un “primer empleo” es una tarea que está más allá del alcance de muchos jóvenes por más empeño que pongan.

La insistencia en las políticas ortodoxas, que “calman” a ciertos actores en los mercados, agita en cambio y arrincona a gruesos sectores de la población.

En América latina, con diferencias según las subregiones, las percepciones han ido en otra dirección. Así, en el Latinobarómetro se ha reducido notablemente el grupo de los que cuando se les preguntaba si sus ingresos les bastaban, decían que “no le alcanza y tiene grandes dificultades”.

Era el 24 por ciento en 2003. En 2011, bajó al 10 por ciento (la proporción más baja desde 1995, cuando se inició la medición).

Al interior de ese promedio general, las diferencias son marcadas. En República Dominicana, el grupo que manifiesta tener serias dificultades económicas es, en 2011, el 23 por ciento. Sigue Honduras, con un 19 por ciento.

Del otro lado de la tabla, son solo el 5 por ciento hoy en Argentina y en Brasil.

Otra pregunta clave respecto de los que indican estar “Muy o algo preocupados” por quedarse desempleados varió totalmente en sus resultados. En 2002, eran el 76 por ciento. Hoy son muchos menos de la mitad, el 35 por ciento. Se redujeron en un 3 por ciento entre 2010 y 2011.

Argentina y Uruguay encabezan la tabla de los países donde hay menor preocupación, con 17 y 23 por ciento.

Las expectativas de la ciudadanía de América latina son hoy muy diferentes de las de hace una década.

No es un tema subjetivo. Tiene que ver con que en muchos países hay ahora un modelo que los representa, que trabaja para ellos.

Se ha construido gracias a las luchas de la población y está en marcha teniendo como parámetros principales de éxito sus logros en términos de inclusión, calidad de vida, empleo, educación, salud... lo que más le importa a la población.

Pero la ciudadanía sabe que hay mucho trecho por recorrer. Por eso avisa que se debe trabajar sobre los altísimos niveles de disparidad, el peso desproporcionado de grupos de intereses sobre el poder, la igualdad efectiva ante la ley.

Existe una amplia heterogeneidad de situaciones respecto del estado de esas luchas.

Según indican las respuestas, los ciudadanos están protagonizando un verdadero cambio de paradigma respecto de la democracia, en amplias áreas de la región, que tiene según ellas una expresión más alta en el sur.

Dejaron definitivamente atrás la visión de que podían esperar salvadores providenciales de dictaduras militares. Confían plenamente en la democracia como el mejor sistema posible.

Pero saben que hay niveles diferenciados de democracia y aspiran a marchar a una que garantice cada vez más derechos. Junto a los derechos políticos, reclaman hoy los derechos económicos y sociales. No los viven como concesiones, sino como el reconocimiento de derechos que hacen a la calidad misma de ciudadano.

Pero por sobre todo, cada vez más, se preparan no a ser espectadores, sino participantes a pleno de la lucha por defender y profundizar el modelo que les ha hecho recuperar la esperanza.